

La crisis de Petrobras y las constructoras brasileñas en el escenario latinoamericano

Gerardo Cerdas Vega / IBASE

Sofía Jarrín Hidalgo / CDES

Silvia Molina / CEDLA

Francisco Rivasplata Cabrera / DAR

Vanessa Torres / AAS



Coalición Regional

Por la transparencia, participación ciudadana
y salvaguardas sociales en la región

La crisis de Petrobras y las constructoras brasileñas en el escenario latinoamericano

CONTENIDO:

- Introducción: Constructoras brasileñas en el escándalo de corrupción de Petrobras. **(CEDLA)**.
- “Campeones Nacionales”: ¿quién se enriqueció en Brasil en la última década? **Gerardo Cerdas Vega (IBASE)**
- Influencia de la política exterior brasileña en el Ecuador: Caso Norberto Odebrecht. **Sofía Jarrín Hidalgo (CDES)**.
- OAS, la empresa que debía construir la carretera atravesando el TIPNIS, en quiebra. **Silvia Molina (CEDLA)**.
- La inversión brasileña en el Perú: La necesidad de reforzar el control en un contexto crítico para la rendición de cuentas. **Francisco Rivasplata Cabrera (DAR)**
- Colombia: Las inversiones ‘non sanctas’ de grupos empresariales brasileños. **Vanessa Tórrez (AAS)**

Producción editorial y diagramación:

Unidad de Comunicación y Gestión de información (CEDLA)

La Paz, junio de 2015

® *Todos los derechos reservados*

La presente publicación está elaborada en el marco de la Coalición Regional por la transparencia y la participación conformada por el Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (IBASE), la Asociación Ambiente y Sociedad (AAS), Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), el Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES) y el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA).

Las constructoras brasileñas en el escándalo de corrupción de Petrobras

CEDLA

Hace aproximadamente un año, Brasil se encuentra inmerso en el que seguramente será el caso de más alto nivel de corrupción de ese país y que se sospecha opera desde mediados de la década de 1990. El “Escándalo de Petrobras” ha colocado a la mayor empresa estatal de América Latina como centro de una investigación sin precedentes en su historia, en la llamada Operación Lava Jato (Lava Auto) que lleva adelante la Policía Federal. De acuerdo a un informe de la propia empresa, los perjuicios causados por la corrupción llegan a una cifra de 6.200 millones de reales (unos 2.066 millones de dólares) que junto a la devaluación de activos y otros factores ocasionaron en el 2014 pérdidas por 44.600 millones de reales (14.866 millones de dólares)¹.

Es innegable que el desarrollo de este caso y las consecuencias futuras mueven intereses y objetivos diversos. Desde las corporaciones dueñas de medios de comunicación opositoras al gobierno de Dilma portavoces del poder empresarial y del sector financiero internacional que estarían detrás del acceso de multinacionales petroleras al manejo de riquezas estratégicas de los pueblos², a los partidos políticos y sus operadores en funciones dentro del aparato público que mantuvieron una relación de complicidad con la red de carteles de grandes empresarios. No quedan atrás funcionarios de compañías extranjeras que en su afán de liberar de responsabilidades a quienes representan³, culpan a la sociedad brasileña por las prácticas corruptas de las que son actores señalando que “son obligadas a sobornar para poder trabajar”⁴.

1 Petrobras registró pérdidas por 7,200 millones de dólares en 2014. 22.04.2015. <http://www.eleconomista.net/2015/04/22/petrobras-registro-perdidas-por-7200-millones-en-2014>

2 “El objetivo de muchos es privatizar Petrobras” Entrevista a José María Rangel, presidente de la Federación Única de Petroleros (FUT). 24.02.2015. <http://telegrafo.com.ec/mundo/item/el-objetivo-de-muchos-es-privatizar-petrobras.html>

3 “Además de grandes consorcios empresariales brasileños, empresas europeas están en la mira de la policía Federal en el caso de corrupción de Petrobras”. Han sido citadas en el escándalo compañías como Rolls-Royce, Skanska, Techint y SBM Offshore que tuvieron contratos con Petrobras por más de 30 billones de reales. 27.02.2015. <http://www.cartacapital.com.br/politica/empresas-europeas-estao-na-mira-da-operacao-lava-jato-3880.html>

4 Un medio de prensa destaca las declaraciones de un ejecutivo de una compañía europea que opera en Brasil: “La corrupción está arraigada en la cultura de aquí - en Brasil se le llama jeitinho” y otras expresiones en el mismo sentido: “En Brasil, las compañías extranjeras han sido presionadas durante mucho tiempo a hacer pagos con el propósito de acelerar los procesos de regulación o a financiar los pagos de sobornos a través de servicios de consultoría de terceros simplemente para competir con las compañías locales. Sin embargo, como ha demostrado el caso de Petrobras, el riesgo de ser descubierto nunca han sido mayores, dice Edward Jenkins, un abogado británico que asesora a compañías que desean expandirse hacia Brasil, así como hacia el Caribe.” Petrobras muestra que ahora la corrupción es un asunto de alto riesgo en Brasil. 16.04.2015.



El alcance de este proceso junto a las implicaciones políticas y económicas a las que podría llegar es impredecible no sólo para Brasil. La política exterior brasileña de las últimas décadas, enfocada en consolidar a Brasil como potencia regional, ha estado dirigida a asegurar su mayor presencia internacional convirtiendo a ese país en el eje de las relaciones Sur - Sur.

La actuación internacional de Brasil no puede ser vista como distanciada y crítica frente a las determinaciones de las economías avanzadas y el sistema financiero internacional. No hay que olvidar que Brasil logró su inserción en el centro del capitalismo internacional y que es actualmente una potencia media o “economía emergente” y es uno de los líderes del G-20⁵. Brasil se encuentra disputando espacios de poder en foros y organismos internacionales como la Organización Mundial del Comercio - OMC, las Naciones Unidas - ONU y en las Instituciones Financieras Internacionales, habiendo pasado de país prestatario a acreedor del FMI. Brasil es también parte de nuevas alianzas o

estrategias geopolíticas y económicas globales, jugando en altas esferas financieras y comerciales internacionales como el banco BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) y el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (BAII) del que es miembro fundador⁶.

Existen voces que destacan que el camino que impulsan estas iniciativas es una nueva arquitectura financiera internacional que desplaza el poder del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, junto a la pérdida de la condición de potencia hegemónica de los Estados Unidos. No obstante, es difícil pensar que esto signifique un real cambio de escenario para los países de América Latina que están excluidos del G20, de las decisiones de las Instituciones Financieras Internacionales y de los nuevos bancos de inversión.

Más aun, el resultado de una mayor integración brasileña al sistema capitalista ha estado acompañada por el ejercicio de una política externa expansionista a través de la exportación de capital y el fortalecimiento de empresas multinacionales y grandes conglomerados. La política de internacionalización de empresas de capitales de origen brasileño, además de estar apoyada por recursos estatales y fondos públicos, ha sido impulsada por el destacado papel que juega la diplomacia brasileña y en especial por el rol que tuvo la activa diplomacia presidencial del ex presidente Lula.

De los 12 países sudamericanos, Brasil ha asumido el liderazgo como principal impulsor y financiador de la Iniciativa para la Integración Regional Sudamericana IIRSA (actualmente COSIPLAN, el Consejo más dinámico de UNASUR). El Plan IIRSA/COSIPLAN resulta para la región la continuidad de la construcción de infraestructura que complementa las cuantiosas inversiones para las obras del Programa de Aceleración del Crecimiento - PAC de Brasil. La interconexión física y la construcción de una plataforma de exportación de dimensiones subcontinentales, expresa la preponderancia que tiene para los gobiernos la inserción de sus países en la economía global.

http://www.diariolibre.com/financiamiento/2015/04/16/i1102191_petrobras-muestra-que-ahora-corrupcin-asunto-alto-riesgo-brasil.html

5 El G20 es considerado el principal foro económico internacional, reúne a las 19 mayores economías del mundo y la Unión Europea.

6 <http://actualidad.rt.com/economia/171805-brasil-finlandia-dinamarca-fundadores-baii>

La concepción de “cinturones de desarrollo” del Plan Plurianual de Inversiones para el periodo 2000-2003 (Avanza Brasil) del gobierno federal brasileño, se convirtió en el sustento de la planificación de los grandes “Ejes de integración y Desarrollo” del IIRSA/COSIPLAN. Estos Ejes reorganizan el subcontinente en grandes regiones donde se planifican y ejecutan megaproyectos e inversiones que facilitan la explotación de recursos naturales y mejoran las condiciones para la actuación de los poderes económicos en negocios a escala internacional.

Este proceso muestra la tendencia a limitar la integración sudamericana, que de manera discursiva se refiere a aspectos políticos, económicos, sociales y culturales, centralmente a la dimensión logística (infraestructura, energía, transportes), en la que el BID, la CAF, el BNDES y las grandes empresas privadas de capitales brasileños (Odebrecht, Queiroz Galvao, OAS y Camargo Correa) resultan hasta ahora entre los actores más destacados.

Estos grandes conglomerados de ingeniería y construcción han estado entre los principales beneficiarios de los créditos públicos dirigidos a obras en Brasil y en América Latina. Del 2000 al 2010, el financiamiento de obras regionales con recursos del BNDES trasladados a las constructoras aumento en 1.185%⁷. Los nombres de estas empresas han estado repetidas veces en los medios de prensa de países centro y sudamericanos, en muchos casos han formado parte de proyectos resistidos, de inversiones conflictivas y de denuncias. En algunos casos han estado implicadas en procesos en los que intervino el gobierno brasileño para solucionar los conflictos de las empresas mediante negociaciones diplomáticas.

Las grandes centrales hidroeléctricas planificadas e impulsadas en Brasil y otros países de la cuenca amazónica no son más que la continuidad del modelo energético brasileño iniciado el 2003 cuando la ahora presidenta Dilma Rousseff era ministra de Minas y Energía. La construcción de las centrales hidroeléctricas del río Madera, Belo Monte y las pretensiones en el mismo sentido de acuerdos energéticos Brasil-Perú⁸ y Brasil-Bolivia⁹ responden a las necesidades establecidas en el Plan Nacional de Energía 2030. Este modelo mantiene el esquema de inversiones que prioriza la alianza de intereses de capitales privados con el poder público. La acción dentro y fuera de Brasil del cartel de las “constructoras” tiene su correlato en el financiamiento político, son las mayores donadoras de partidos políticos y muy activas en el apoyo a campañas presidenciales brasileñas.

Reportes sobre las investigaciones del escándalo de Petrobras destacan que estos conglomerados son parte de las 16 empresas que conformaban un “club” que manipulaba licitaciones. Su objetivo fue adjudicarse las mayores obras contratadas por la estatal Petrobras entre 2004 y 2014. También están involucradas en las mayores obras públicas de Brasil, como las mega obras urbanas para el mundial 2014 y las olimpiadas del 2016. Su presencia y actuación en los proyectos de IIRSA/COSIPLAN y la construcción de hidroeléctricas seguramente será parte de los 750 contratos que

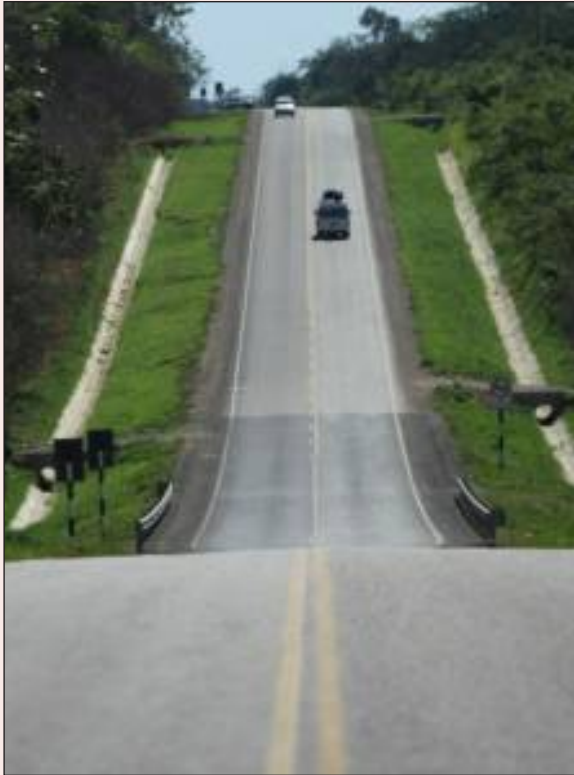
Las grandes centrales hidroeléctricas planificadas e impulsadas en Brasil y otros países de la cuenca amazónica no son más que la continuidad del modelo energético brasileño iniciado el 2003 cuando la ahora presidenta Dilma Rousseff era ministra de Minas y Energía.

7 García Ana. BNDES e a expansão internacional de empresas com sede no Brasil. 2011

8 El 12 de mayo del 2014, la comisión de Relaciones Exteriores del Congreso peruano decidió archivar el proyecto de Ley que proponía aprobar el “Acuerdo entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la República Federativa del Brasil para el Suministro de Electricidad al Perú y Exportación de Excedentes al Brasil” suscrito el 16/06/2010. Los motivos: se vulneraría varios artículos de la Constitución al comprometer recursos naturales que son patrimonio de la Nación para uso exclusivo de un Estado extranjero; gran parte de energía generada estaría comprometida para la exportación al Brasil, en perjuicio de la atención a la futura demanda del mercado peruano.

9 En marzo del 2015, el Ministro de Hidrocarburos y Energía de Bolivia anunciaba la firma de un Memorandum de Entendimiento con Brasil para realizar el estudio de pre-factibilidad, diseño final y construcción de los proyectos hidroeléctricos Bi-nacional Río Madera (Ribeirao) y Cachuela Esperanza.

<http://www2.hidrocarburos.gob.bo/index.php/prensa/noticias/980-bolivia-y-brasil-avanzan-en-la-consolidaci%C3%B3n-de-la-seguridad-energ%C3%A9tica-de-la-regi%C3%B3n.html>



se anuncia serán investigados, incluyendo entre estos, muchos que tienen implicancias en otros países¹⁰.

A medida que avanzan las revelaciones, el número de involucrados y las dimensiones del escándalo no paran de crecer. Además de ejecutivos de la petrolera, se suman actores del poder empresarial y del poder político e institucional del país. Directores de las mayores constructoras de Brasil y dirigentes del partido de gobierno y de oposición también formarían parte de la red. Las investigaciones sobre los vínculos de la corrupción han alcanzado a empresas multinacionales¹¹ y hasta a la banca suiza¹². Más de un año de investigaciones muestran la complejidad y expansión del esquema de corrupción que involucra a Petrobras y a poderes económicos empresariales y políticos.

La investigación de contratos fuera de Brasil, el accionar de las empresas y de la diplomacia seguramente será una etapa complicada del proceso. En algunos países ya son conocidas denuncias y existen informes que mostrarían la magnitud de su poder económico y político alcanzado para influenciar decisiones de proyectos y hasta de políticas, en alianza con elites locales y actores de los gobiernos¹³.

Este proceso se manifiesta en la desesperanza y frustración social frente a la desaparición de valores éticos en el accionar

político de gobiernos, partidos y en algunos casos hasta dirigencias de organizaciones sociales, que resultan utilizando las instituciones para oprimir los deseos sociales de igualdad, libertad y reconocimiento.

Que exista este proceso de investigación es importante para la sociedad brasileña y de otros países como prueba que la impunidad plena no siempre es posible, en particular cuando el repudio a estas prácticas se va generalizando, se manifiesta en la movilización y organización popular.

Los artículos siguientes informan acerca de la forma en que operan estas empresas en algunos países de Sud América.

10 “Las obras públicas en América Latina salpicadas por el escándalo de Petrobras”. 23.12.2014. http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2014/12/141222_brasil_petrobras_obras_america_gl

11 “Bloquean fondos de multinacionales por el escándalo en Petrobras”. 13.12.2014. <http://www.elsol.com.ar/nota/223062>

12 Revelan nombres de bancos suizos involucrados en el caso Petrobras. 10.03.2015. <http://www.cronista.com/financiamiento/Revelan-nombres-de-bancos-suizos-involucrados-en-el-caso-Petrobras-20150310-0004.html>

13 En el caso boliviano, la “Evaluación del proceso de contratación para la Construcción de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos, llave en mano con financiamiento del proponente” realizada el año 2008 por la Contraloría General del Estado a solicitud del Senado Nacional a través de nota P. N° 023/2009 del 3 de marzo de 2009 y por denuncias efectuadas por ASIEME Ingenieros Eméritos Cochabamba, el 18 de septiembre de 2008, detalla el incumplimiento al orden jurídico administrativo del país que favorece a una empresa brasileña.

En el caso ecuatoriano, el “Informe Final de la Auditoría Integral de las deudas ecuatorianas, Tomo 4: Informe Final de Auditoría de la deuda bilateral” de noviembre del 2008, realizada por la Comisión de Auditoría Integral del Crédito Público – CAIC analiza la situación del crédito público bilateral con Brasil y otros países, las condicionalidades del financiamiento, las interferencias y alteraciones en la legislación y ordenamiento jurídico del país y detalla en casos relevantes el vínculo entre bancos estatales financiadores de proyectos, empresas y país contratante. http://www.auditoriadeuda.org.ec/index.php?option=com_content&view=article&catid=48&id=47&Itemid=58

Campeones Nacionales: ¿quién se enriqueció en Brasil en la última década?

GERARDO CERDAS VEGA / IBASE

La trayectoria económica y social brasileña desde 2003, cuando el primer gobierno Lula se instaló en el Palacio del Planalto (en Brasilia), ha sido materia de innumerables artículos, libros y trabajos académicos. Detractores y defensores se han sucedido a lo largo de estos 12 años para fustigar al gobierno o para cerrar filas a favor de un proyecto que fue viabilizado con el retorno del Estado como agente del desarrollo y cuyas bases fueron (en eso parece haber bastante consenso) la reinserción económica del país en el comercio mundial vía la exportación de *commodities*, por una parte, así como la inclusión social de millones de personas gracias a políticas de transferencia de renta y al aumento del consumo de masas, por otra.

En estos años, se hizo famosa la expresión “campeones nacionales” para hacer referencia a la política del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), adoptada en 2007, de apoyar la internacionalización de grandes grupos y empresas brasileñas que, con el apoyo financiero del Banco, extendieron su radio de acción no solo en América Latina y Caribe, sino en los cinco continentes. Pero, como frecuentemente sucede con expresiones generales que buscan simplificar una determinada política o fenómeno, la falta de precisión es peligrosa porque puede inducir interpretaciones excesivas o insuficientes que, al final, no contribuyen con una comprensión más objetiva de la realidad.

En primer lugar, es necesario superar el halo de misterio y condena que se acostumbra lanzar sobre todo tipo de operación internacional realizada por el BNDES, para entender que, en verdad, existen muchos bancos de desarrollo a nivel mundial que realizan operaciones de exportación e importación de bienes y servicios de empresas en sus respectivos países, buscando la internacionalización de las mismas. Claro que caben legítimas preocupaciones y cuestionamientos sobre cuáles criterios se usan para escoger las empresas beneficiarias de ese tipo de política, sus consecuencias sociales y ambientales, incluso financieras, que atañen a grupos específicos (afectados directamente por las operaciones de las empresas) así como de toda la sociedad, que en última instancia es la que paga por todo lo que un banco público financia.

En segundo lugar, debemos recordar que varias de las empresas brasileñas más internacionalizadas, como las «*empreiteiras*” (grandes empresas de construcción civil e ingeniería) se internacionalizaron ya en las décadas de 1970 y 1980, por varios factores que sería necesario explicar de una forma más detallada. Otras, como PETROBRAS y la EMBRAER, también tienen una significativa presencia internacional desde esas mismas décadas. Así, no todas las empresas que fueron favorecidas en los últimos años con los préstamos generosamente subsidiados del BNDES o que se expandieron internacionalmente, serían ejemplos de “campeonas nacionales”. Estas últimas fueron seleccionadas en ramos donde se suponía que Brasil podría alcanzar una escala de actuación y fuerza internacional,

Mediante BNDES-Par, el BNDES participa accionariamente de empresas como PETROBRAS, Vale y muchas otras, lo que representa un significativo negocio para el propio Banco, pues es de las participaciones accionarias que la institución obtiene aproximadamente la mitad de su lucro anual.

consolidando la influencia del país como potencia económica emergente, uno de los objetivos perseguidos por el gobierno brasileño en la última década. Así, empresas de los ramos de petróleo y petroquímica, papel y celulosa, carnes, minería, siderurgia, jugo de naranja y cemento, fueron inyectadas con grandes volúmenes de capital para proyectarlas en la escena económica como poderosos *players* en sus respectivas áreas de actuación.

Es el caso de empresas como los frigoríficos JBS-Friboi, Marfrig y Bertin, de la mega-empresa de lácteos BRL-Lácteos Brasil, de la gigante de telefonía OI de y de la Fibria, una poderosa empresa del ramo de papel y celulosa que resultó de la fusión de Aracruz con Votorantim. Es el caso también de la mega-empresa minera Vale y de la estatal PETROBRAS. A estas empresas, según se estima, fueron transferidos más 40 mil millones de reales por parte del BNDES entre 2007 y 2011. Además, el BNDES es socio accionista de muchas de todas estas empresas, mediante su brazo de participaciones BNDES-Par. Así por ejemplo, el Banco controla 23% de las acciones de Fibria, 24,59% de las acciones de JBS-Friboi y 49% de la OI (junto a los fondos de pensiones públicos). Mediante BNDES-Par, el BNDES participa accionariamente de empresas como PETROBRAS, Vale y muchas otras, lo que representa un significativo negocio para el propio Banco, pues es de las participaciones accionarias que la institución obtiene aproximadamente la mitad de su lucro anual. Como informaba la prensa brasileña en 2011:

“A participação direta do BNDES na criação de grandes grupos empresariais brasileiros é uma das principais estratégias traçadas por Coutinho¹, na qual a BNDESPar tem sido cada vez mais agressiva na política de criação de gigantes nacionais. Empresas de carnes, como a JBS/Bertin e a Marfrig, obtiveram um total de R\$ 6,85 bilhões da BNDESPar por meio de venda de fatia societária ou subscrição de debêntures conversíveis em ações. Esses valores não levam em conta os financiamentos concedidos a elas. Na Vale, a BNDESPar aportou R\$ 3,9 bilhões. Em seguida aparecem Votorantim Celulose e Papel (VCP), que mais tarde viria a se tornar a Fibria, e a Telemar (agora Oi), com R\$ 1,8 bilhão e R\$ 1,2 bilhão, respectivamente.”²

Otra de las confusiones que el término “campeonas nacionales” induce tiene que ver con hacernos creer en la fortaleza corporativa y financiera de esos grandes grupos capitalizados por el Banco, como si fueran invencibles y todo poderosos grupos expandiéndose por el mundo sin encontrar dificultades. La verdad, hoy en día prevalecen muchas dudas sobre la efectividad de tal política, a juzgar por sus resultados concretos, pues no todas las empresas muestran la misma trayectoria. Por ejemplo, la gran empresa de lácteos LBR no logró estructurar una escala de mercados adecuada, no consiguió hacerle frente a las deudas asumidas y ya en 2013 tuvo que iniciar un proceso de “recuperación judicial”. En otras palabras: quebró. Hoy en día fue absorbida por la multinacional francesa del sector Lactalis.³ A OI, por su parte, extremadamente endeudada (30 mil millones de reales en diciembre de 2013) terminó fusionándose con la portuguesa Portugal Telecom (esta última fue luego vendida a la multinacional Altice). La Fibria, del ramo de papel, ha tenido serias dificultades financieras y, aunque se mantiene operando y su posición de mercado como principal productor mundial de celulosa de eucalipto, muestra finanzas inestables y tuvo pérdidas de 539 millones de reales en el primer trimestre de 2015.⁴ El frigorífico Marfrig, otro de los grupos que recibieran sustancial apoyo del Banco, ha mostrado finanzas frágiles y bajísima valoración en sus

1 Luciano Coutinho, economista y Presidente del Banco desde 2007 hasta hoy. Nota del autor.

2 Ver: <http://www1.folha.uol.com.br/fsp/mercado/me0107201106.htm>

3 Ver: <http://www.valor.com.br/agro/3299514/aprovado-plano-de-recuperacao-da-lbr>

4 Ver: <http://www.valor.com.br/empresas/4019818/fibria-reverte-lucro-e-perde-r-5693-milhoes-no-1>

acciones en la Bolsa, por lo cual corren rumores de su eventual venta a JBS, lo cual suscita preocupaciones entre las autoridades anti-trust brasileñas.⁵ El grupo Bertin, que había recibido 2,5 mil millones de reales del Banco, quebró el 2009 y terminó siendo adquirido por la JBS.

Pero quizás el caso más emblemático de las empresas que se expandieron en los últimos ocho años gracias al apoyo del BNDES sea el de JBS-Friboi. En 2007 la empresa asumió su nombre actual (JBS), año en que abrió su capital en la Bolsa. En 2014 facturó 116 mil millones de reales, lo que la convierte en la mayor empresa privada brasileña, al frente de la mismísima Vale. En 2012,



gracias al éxito de sus operaciones con carnes, crearon la 'J&F Inversiones' para diversificar su portafolio y hoy actúan en las áreas de papel y celulosa, bancos, ingenios de biodiesel, fábricas de champú y jabón, entre otras. La empresa cuenta con 210 mil funcionarios y opera en ocho países: Brasil, Argentina, Uruguay, Italia, México, Canadá, Estados Unidos y Australia.

Entre 2007 y 2009, el BNDES colocó 8,3 mil millones de reales en la compañía mediante la compra de acciones, además de 2 mil millones de reales en la forma de préstamos subsidiados. Según reportaje de la Revista Piauí⁶, de febrero de 2015, nunca ninguna empresa brasileña recibió un valor tan exorbitante de dinero. Fue tan grande la participación del Banco en la capitalización de JBS (alcanzando 31% de las acciones) que el gobierno optó por exponer menos al Banco y transferir una parte de sus acciones a la Caja Económica Federal (CAIXA). Gracias a esos recursos, la compañía ha crecido aceleradamente mediante la adquisición de muchos otros frigoríficos en apuros financieros resultado de la crisis mundial del 2008 (justo cuando la empresa comenzó su trayectoria ascendente y otras iban cuesta abajo). Una de las mayores adquisiciones realizadas por la compañía fue la compra de la poderosa empresa de carnes norteamericana Swift, en 2007, por un valor de 1,5 mil millones de dólares, operación a la que el BNDES aportó 750 millones de dólares, la mitad del total. En 2008, nuevamente el Banco apoyó la adquisición de otra gigante norteamericana del sector, la Smithfield Beef Group, con un aporte de 2,6 mil millones de reales. Pero la mayor de todas las operaciones solo llegaría en 2009, cuando los dueños de la JBS compraron simultáneamente la Pilgrim's Pride, la mayor empresa de pollo fresco de los Estados Unidos y el frigorífico brasileño Bertin, uno de sus mayores competidores nacionales. La compra de la Pilgrim's ascendió a 2,8 mil millones de dólares, todo financiado con un lanzamiento de debentures convertibles en acciones por parte del Banco.

A pesar de todo ese apoyo financiero, los beneficios para Brasil son casi inexistentes y las críticas a la forma en que el Banco ha manejado toda la política de las "campeonas" han sido sumamente duras, de todos los lados, incluyendo dueños de otras empresas del ramo como de economistas, académicos y organizaciones no gubernamentales. El reportaje de la Revista Piauí, ya mencionado, alertaba lo siguiente:

5 Ver: <http://www.valor.com.br/agro/3994082/marfrig-tem-forte-alta-na-bmfbovespa>

6 Ver: <http://revistapiaui.estadao.com.br/edicao-101/vultos-dos-negocios/o-estouro-da-boiada>

Brasil como un todo se beneficia poco o nada. Por ejemplo, aunque las empresas de construcción civil vendan servicios en el extranjero, la mayor parte de las obras es realizada por trabajadores locales en terceros países y no hay un efecto inmediato y evidente sobre la economía nacional.

“A crise no Bertin expôs os equívocos da política de campeões nacionais. O BNDES havia aportado quase 18 bilhões de reais aos frigoríficos eleitos e praticamente todas as operações estavam desmoronando. A quebra do Frigorífico Independência, três meses depois de o banco ter injetado mais de 250 milhões de reais para impulsiona-lo, revelava o risco das operações e colocava em xeque a capacidade de análise de crédito dos técnicos da instituição. O Bertin, caso quebrassem, mancharia irremediavelmente a imagem do Banco”.⁷

Esas operaciones son muy cuestionadas en Brasil, pues no hay realmente certeza sobre cuáles fueron los criterios técnicos para escoger a las empresas beneficiadas, no hay creación de empleos en el país y la riqueza está excesivamente concentrada en grupos familiares, afectando toda la cadena de negocios en el sector de carnes. En otras áreas, como telecomunicaciones y minería, las cosas no han andado de la mejor forma, incluso la Vale y PETROBRAS han llegado a deshacerse de

importantes activos fuera del país adquirido en los últimos años, al calor de la expansión apoyada por el BNDES.⁸

De las empresas del ramo de la construcción e ingeniería se ha dicho mucho ya. Incluso nuestra Coalición ha publicado libros y folletos al respecto. Pero en principio ellas no fueron objeto de la política de las “campeonas”, por lo menos no directamente. Claro que esas empresas también se han beneficiado de los recursos del Banco para ampliar su escala, actuando preferentemente en América Latina y África. Incluso, esas empresas terminan siendo las beneficiarias de los recursos que el Banco destina a la construcción de las infraestructuras de explotación de las minas de la Vale, como el caso de Moatize, en Mozambique. También, la expansión de obras de infraestructura (carreteras, hidroeléctricas, etc.) en países como Angola, en gran parte es financiada por el Banco y ejecutada por empresas como Odebrecht, Camargo Correa y otras.

De todo esto, Brasil como un todo se beneficia poco o nada. Por ejemplo, aunque las empresas de construcción civil vendan servicios en el extranjero, la mayor parte de las obras es realizada por trabajadores locales en terceros países y no hay un efecto inmediato y evidente sobre la economía nacional. El Banco alega que la venta de bienes y servicios le hace bien a las empresas brasileñas porque éstas crean empleos en el país y además aumentan el comercio exterior; no obstante, la institución no aporta evidencias claras de cómo la política de las grandes “campeonas” efectivamente se tradujo, en los últimos ocho años, en bienestar para la población brasileña. Las empresas beneficiadas actúan en sectores intensivos en recursos naturales (minas, petróleo, papel y celulosa, jugo de naranja, ganadería, etc.) y no queda claro cómo “exportar ganado” se relaciona con la efectiva transformación de Brasil en una potencia económica y mucho menos cómo eso garantiza la adecuación a parámetros socio-ambientales justos. En lugar de apostar por industrias de alto valor agregado e intensivas en tecnología, por ejemplo, se invierten miles de millones de reales en actividades que reproducen el viejo dilema de nuestros países: ser exportadores de materias primas o productos de bajo valor agregado y altos riesgos sociales y ambientales, negocios que benefician más a los controladores de las empresas que al país en su totalidad. Aunque en 2014 el gobierno brasileño públicamente afirmó que la política de las “campeonas” había llegado a su fin, estas y otras críticas siguen siendo válidas y necesitan ser hechas con relación a tal política, a sus elevados costos y a sus magros resultados sociales.

7 Ver: <http://revistapiaui.estadao.com.br/edicao-101/vultos-dos-negocios/o-estouro-da-boiada>

8 Ver: <http://www.valor.com.br/empresas/3809236/vale-vende-participacoes-em-empresendimentos-para-japonesa-mitsui>

Influencia de la política exterior brasileña en el Ecuador: Caso Norberto Odebrecht

SOFÍA JARRÍN HIDALGO
CENTRO DE DERECHOS ECONÓMICOS Y SOCIALES (CDES)

Enmarcados en las dinámicas y contextos del capitalismo internacional, desde principios de este siglo hasta la actualidad, la política exterior brasileña cumple un rol decisivo en la determinación del escenario político y económico de la región; fundamentalmente por su relevancia en la generación de procesos de inversión directa e indirecta en el sector energético y de infraestructura, así como su liderazgo en los mecanismos de intercambio comercial de commodities entre los países de la región.

Con el propósito de promover procesos de “desarrollo” en estos sectores involucrados, los representantes de los gobiernos de Ecuador y Brasil, a partir del 2000, han estrechado relaciones de cooperación que se cristalizan en manifiestos oficiales de ambos países en diversos espacios de integración supranacionales, como lo son la CAN, MERCOSUR y últimamente UNASUR y CELAC (Guerrero, 2012, pág. 8).

La intención de consolidar relaciones políticas de integración y cooperación entre ambos países se deriva de objetivos políticos y económicos concretos. Desde la perspectiva brasilera, su dinamismo diplomático está abocado a promover el discurso de “la unidad latinoamericana”, el cual persigue el interés de establecer socios comerciales que representen y se acojan a las necesidades de Brasil. En términos geopolíticos, estos intereses se expresan en estrategias que están orientadas a garantizar la seguridad energética de ese país, a través de la estructuración de una plataforma política, económica y militar que se sustenta en acuerdos bilaterales y multilaterales (Moreno, 2012).

Para lograr este propósito, la política exterior del gobierno brasileño se ha apalancado en incentivos crediticios y en la promoción de inversiones directas e indirectas del Banco Nacional de Desarrollo Social y Económico (BNDES), cuyo capital permite impulsar la internacionalización de grandes empresas, con la finalidad de asegurar la captación de recursos e insumos para su crecimiento económico.

En el Ecuador, la incidencia de la política exterior de Brasil se materializa en diversos proyectos de infraestructura y de energía encaminados por estas empresas, los cuales están enmarcados en la construcción de corredores viales, acueductos, sistemas de riego y agua potable, infraestructura aeroportuaria, centrales hidroeléctricas, oleoductos y canales de transporte de hidrocarburos. Dichos proyectos, han acarreado diversos desacuerdos diplomáticos con el Estado ecuatoriano y el gobierno brasileño debido a que existen cuestionamientos articulados a prácticas diplomáticas que responden a intereses privados y que buscan generar condiciones preferenciales que brindan ventajas competitivas frente a otras empresas locales. Estas tensiones se han expresado



fundamentalmente en las compañías Norberto Odebrecht y la petrolera estatal Petrobras (Moreno, 2012, págs. 18-25).

En el caso de la constructora Norberto Odebrecht S.A., inicia su actuación en el Ecuador desde 1987 con el Proyecto Hidroeléctrico Acueducto Santa Elena. En casi tres décadas de operación (1987-2013), la empresa ha logrado captar alrededor de 15 proyectos de infraestructura con diferentes instituciones públicas del Estado ecuatoriano, por un monto global de 2.293 millones de dólares, de los cuales seis de ellos se financiaron total o parcialmente por el BNDES. El monto total de aportaciones de esta entidad financiera asciende a 639 millones de dólares entre el 1987 al 2013 (Coalición Regional, 2015).

En torno al desempeño de esta empresa, a lo largo de su gestión se han generado problemas que han desembocado incluso en crisis diplomáticas entre ambos países. Entre las observaciones realizadas, se ponen en evidencia que en varios proyectos los costos finales de los contratos otorgados para su ejecución experimentaron incrementos cuantiosos, a través de adendas efectuadas a la figura de los contratos originales. Al respecto podemos mencionar el caso emblemático del proyecto vial de la Interoceánica Norte en la Provincia de Sucumbios (1996), sobre el cual se impusieron seis adendas al contrato original, incrementando el monto inicial de la licitación de 80.586.701,14 de dólares a 169.949.472 de dólares, es decir que presentó un incremento del 111% (Coalición Regional, 2015).

De igual manera, podemos mencionar otros casos puntuales que presentan las mismas irregularidades, como por ejemplo el proyecto de la Central de Generación Hidroeléctrica Manduriacu (2011) y el Poliducto Pascuales-Cuenca (2013); en el primer caso, el costo de adjudicación de la obra fue de 124 millones de dólares, sin embargo, en su ejecución se realizó un incremento del 58% de valor inicial, es decir que alcanzó un costo total de 183 millones de dólares. Por otro lado, el caso del Poliducto Pascuales-Cuenca hasta el momento presentó un incremento del 19% del contrato inicial, el cual pasó de un costo nominal de 370 millones a 440 millones de dólares. Otra de las observaciones que saltan a la vista, son los plazos de cumplimiento de las obras otorgadas a Odebrecht, puesto que estas modificaciones al presupuesto de los contratos también se traduce en demoras importantes en la entrega de las obras comprometidas, como es el caso del proyecto de la vía Interoceánica Norte, que presentó demoras de aproximadamente 37 meses frente al plazo establecido, es decir que el trabajo finalizó 67 meses después de la firma del contrato inicial (Coalición Regional, 2015).

La capacidad de incidencia de la política exterior brasilera en el Ecuador, se refleja en que existen irregularidades en la firma de convenios de crédito entre la empresa y el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social, que se traducen en controversias con el marco normativo interno; no obstante, Odebrecht mantiene preferencias en la adjudicación de proyectos de infraestructura. De acuerdo al informe final de la Auditoría de la Deuda Bilateral de 2008, efectuado por la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público (CAIC), el proyecto Hidroeléctrico Acueducto Santa Elena del tramo II (1992) fue derivado a la empresa con un costo aproximado de 160.898 millones de dólares. Anterior a la firma del contrato, la empresa ya contaba con un crédito de 11.900 millones de dólares, por parte de la institución financiera. De igual manera, con relación a las Obras Complementarias de Infraestructura para la Península de Santa Elena (1997), cuyos costos alcanzaron los 126,7 millones de dólares, de los cuales el banco aprobó anticipadamente

un convenio de crédito por 38.250 millones de dólares. En este último caso, también se observa que la adjudicación de dicho contrato fue direccionado hacia la empresa, sin cumplir con los procedimientos reglamentados por la ley en casos de licitación de contratos de obras públicas (CAIC, 2007).

Así también, se han presentado incumplimientos en los procesos de licenciamiento ambiental¹ de los proyectos impulsados por la empresa, tal es el caso del Nuevo Aeropuerto del Tena en el Provincia de Napo (2008) y en la Central de Generación Hidroeléctrica Manduriacu en la Provincia de Pichincha (2012), ambos proyectos consolidaron sus procesos de adjudicación y firmas contractuales, sin contar con estudios previos de impacto ambiental (Coalición Regional, 2015).

El caso que se distingue por causar mayores repercusiones en las relaciones bilaterales entre Ecuador y Brasil, se remite a la construcción de la Central Hidroeléctrica San Francisco (2000), mediante el consorcio conformado por Norberto Odebrecht y la empresa italiana de ingeniería Ansaldo. El monto inicial de la adjudicación del contrato fue de 286,8 millones de dólares, de los cuales 242,9 millones se financiaron con crédito del BNDES, en un plazo a pagar de 14 años. La construcción de la hidroeléctrica inició en febrero de 2004 y culminó en junio de 2007, reportando un costo total de 354.943.453 millones de dólares. Un año después de su apertura, la hidroeléctrica presentó fallas estructurales que causaron su paralización durante cinco meses, generando pérdidas cuantificadas en 200 mil dólares diarios, es decir un total de 43 millones de dólares. Este evento desembocó en la expulsión de la empresa del país, por ende la suspensión de otros contratos adjudicados (hidroeléctrica Baba y Toachi-Pilatón) y la interrupción de relaciones diplomáticas durante dos meses.

Como parte de las repercusiones legales del conflicto de la Hidroeléctrica San Francisco, en el 2008, el gobierno ecuatoriano impuso una demanda contra el BNDES en la Cámara de Comercio Internacional de París, alegando que el convenio de crédito firmado entre el banco y Odebrecht presentaba condiciones lesivas y abusivas contra el Estado ecuatoriano. Finalmente, en julio de 2010, el gobierno ecuatoriano y la empresa Odebrecht acordaron que la empresa repararía todos los daños causados, sin que esto represente un costo adicional para el país, y adicionalmente la Contraloría General del Estado, impuso una glosa por 70,7 millones de dólares hacia la empresa. Pese a las diferentes observaciones y controversias generadas por un desempeño cuestionable de la compañía Odebrecht, actualmente la empresa cuenta con nuevas perspectivas contractuales en el Ecuador. De hecho, es adjudicataria de la ejecución de la segunda fase del Metro Subterráneo del Distrito Metropolitano de Quito, contrato con un costo aproximado de 2.005 millones de dólares, 505 millones adicionales a los planteados en el presupuesto referencial (El Comercio, 2015).

Frente a estas reflexiones, es necesario matizar los hechos descritos con el estado de las relaciones bilaterales entre ambos países, puesto que actualmente los mecanismos de cooperación regional

Pese a las diferentes observaciones y controversias generadas por un desempeño cuestionable de la compañía Odebrecht, actualmente la empresa cuenta con nuevas perspectivas contractuales en el Ecuador.



1 De acuerdo al artículo 20, la Ley de Gestión Ambiental, “el inicio de toda actividad que suponga riesgo ambiental se deberá contar con la licencia respectiva, otorgada por el Ministerio del ramo”. Así también, el mencionado cuerpo legal define que la “Licencia Ambiental.- Es la autorización que otorga la autoridad competente a una persona natural o jurídica, para la ejecución de un proyecto, obra o actividad. En ella se establecen los requisitos, obligaciones y condiciones que el beneficiario debe cumplir para prevenir, mitigar o corregir los efectos indeseables que el proyecto, obra o actividad autorizada pueda causar en el ambiente” (Congreso, Registro Oficial Suplemento 418 de 10-sep-2004).

Ante las lecciones aprendidas que nos arroja la experiencia con Odebrecht se plantea la necesidad de establecer adecuados mecanismos de control, regulación, transparencia y vigilancia permanentes en torno al desempeño de estos actores económicos.

gozan de una notablemente salud y estabilidad, más aun con la consolidación de las agendas de integración regional de infraestructura y energéticos promovidos por organismos supranacionales como UNASUR y la CELAC. Desde esta perspectiva, es importante destacar que el interés prioritario del gobierno ecuatoriano, es garantizar la soberanía del Estado sobre los recursos naturales y recuperar sus roles como un agente regulador de la dinámica económica interna y externa (Senplades, 2013). No obstante, las lecciones aprendidas que nos arroja la experiencia con Odebrecht y frente a las perspectivas de fortalecer la relaciones bilaterales con Brasil como aliado estratégico para la consolidación de un bloque regional, se plantea la necesidad de establecer adecuados mecanismos de control, regulación, transparencia y vigilancia permanentes en torno al desempeño de estos actores económicos para precautelar la soberanía del país.

BIBLIOGRAFÍA

- CAIC. (2007) *Informe Final de la Auditoría Integral de la Deuda Ecuatoriana*. Quito: Ministerio de Economía y Finanzas.
- Coalición Regional. (2015). *Inversión de empresas brasileñas en América Latina*. Camargo Correã, Odebrecht y OAS. Bogotá: Nomos S.A.
- Congreso. (Registro Oficial Suplemento 418 de 10-sep-2004). *Ley de Gestión Ambiental*. Quito: Comisión de Legislación y Codificación.
- El Comercio. (27 de abril de 2015). Multilaterales autorizan al Cabildo a renegociar el Metro. *El Comercio*.
- Guerrero, N. C. (2012). *La influencia político-comercial en las relaciones entre Ecuador y Brasil en los casos PETROBRAS y ODEBRECHT*. Quito: Universidad Internacional del Ecuador.
- Moreno, D. A. (2012). *Impacto de la Política Exterior Brasileña en Sudamérica*. Bogotá D.C.: Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones internacionales. Recuperado el mayo de 2015, de <http://repository.javeriana.edu.co/bitstream/10554/2384/1/ArreazaMorenoDavid2012.pdf>
- Senplades. (2013). *Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017*. Quito: Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo.

OAS, la empresa que debía construir la carretera atravesando el TIPNIS, en quiebra

SILVIA MOLINA / CEDLA

A finales de marzo del 2015 la Constructora OAS¹, conocida en Bolivia por haber estado encargada de construir la carretera que atravesaría el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécore (TIPNIS), solicitó a la justicia brasileña acogerse a la Ley de Protección de Quiebras. De ser aceptada esta solicitud, se permitiría a la empresa renegociar sus deudas con la mediación de la justicia, para evitar la quiebra definitiva.

OAS llegó a esta situación por la “intensa restricción de crédito” que le ha significado estar implicada en la investigación por la millonaria corrupción en Petrobras y que tiene entre sus grandes actores a las mayores constructoras brasileñas. Las llamadas “cuatro hermanas”, como se conoce en Brasil a los poderosos grupos económicos Odebrecht, OAS, Camargo Corrêa y Andrade Gutiérrez, figuran entre los principales actores investigados, junto a otras 20 empresas del sector de la construcción. Estos consorcios manipulaban las licitaciones y elevaban los precios para obtener contratos con Petrobras. El dinero obtenido iba en beneficio de las empresas y una parte era repartida en sobornos. Un porcentaje llegaba a directores de Petrobras y otro era dirigido como “donaciones” para campañas electorales de políticos de oposición y oficialismo².

La presencia de OAS en Bolivia empieza antes de la carretera Villa Tunari - San Ignacio de Moxos, formando parte de procesos cuestionados y que fueron objeto de denuncias. El expresidente del Servicio Nacional de Caminos José María Backovic llegaría a afirmar “Esta entrega sería parte de un paquete a nivel plurinacional con la inclusión de Potosí - Uyuni y Villa Tunari - San Ignacio de Moxos, que se habría comprometido el MAS con OAS en pago del aporte que habría hecho esta empresa a las campañas políticas de (Luiz Inácio) Lula (expresidente de Brasil) y Evo³.

En algunos casos los proyectos en los que estuvo involucrada OAS tienen una historia de más de diez años sin que sean resueltos. Son proyectos ejecutados en varias gestiones de gobierno y son ejemplos de la manera como se conjugan y realizan las negociaciones entre intereses políticos y empresariales, llegando a ser estas las instancias determinantes en el desarrollo de las mayores inversiones del país en construcción de carreteras.

1 El conglomerado empresarial OAS tiene su sede principal en Sao Paulo y reúne empresas que están presentes en Brasil y en países de Centro, Sud América y África. Estaría formado por más de 10 empresas que participan en sectores desde la construcción civil, defensa, inmobiliario, concesiones de obras públicas, energía, gas y petróleo, administración de estadios, entre otros.

2 Ver http://mexico.servidornoticias.com/187_america/3029227_la-constructora-brasilena-oas-se-acoge-a-ley-de-quebras-por-el-caso-petrobras.html

3 <http://www.hacer.org/latam/bolivia-empresa-brasilena-oas-pago-campanas-de-evo-y-lula-recibiendo-a-cambio-obras-millonarias-sin-mediacion-licitacion-eju-tv/>



OAS ingresó a trabajar en Bolivia en noviembre del 2006 en proyectos de la Red Vial Fundamental, bajo responsabilidad de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC). Entre los años 2006 al 2009, los contratos que firmó con la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) corresponden a proyectos con financiamiento de fuentes externas, alcanzando a un monto aproximado a 800 millones de dólares. A partir del año 2007, OAS resultó siendo la única empresa constructora brasileña trabajando en Bolivia.

Desde los primeros vínculos de OAS con Bolivia y en su relación con las instituciones estatales es posible identificar el grado de flexibilidad con el que se manejan las leyes y compromisos que llegarían a facilitar la presencia de esta empresa en el país y determinar su desempeño.

En general la contratación de OAS estuvo relacionada con ajustes, cambios y adecuación de la legislación sobre adquisición de bienes y servicios. Las modalidades de contratación (directa sin licitación, subrogación, financiamiento del proponente, llave en mano sin contar con estudios y costo del proyecto) y las enmiendas realizadas a los documentos de licitación habrían agilizado los procesos favoreciendo a OAS. En general en estos procesos jugaron un papel muy importante la diplomacia brasileña, los bancos y el gobierno de Brasil, al incorporar en la negociación de contratos de préstamo con Bolivia, cláusulas que obligan a la contratación de empresas de capital brasileño. El primer contrato entre OAS (como Asociación Accidental OAS-ECTOR), fue firmado para la construcción de la carretera Potosí - Uyuni, proyecto en el que una auditoría determinó irregularidades en la adjudicación a esta empresa y el incremento del 25% del costo⁴.

El contrato para la construcción de la carretera Potosí - Tarija resulta de la subrogación y contratación directa del proyecto el año 2009, después de la rescisión de contrato con la Queiroz Galvão, empresa que inició la construcción de la carretera el 2003 y debía concluir el 2007. Denuncias e informes de baja calidad de las obras y la intervención de los presidentes de Bolivia y Brasil, Evo Morales y Luiz Inácio Lula da Silva concluyeron en la continuación del crédito de 120 millones de dólares del PROEX del Banco do Brasil y 60 dólares de la CAF⁵ y llevaron a que la ABC suscriba el contrato con OAS por 246 millones de dólares. Actualmente, el costo total del proyecto ha llegado a 338 millones de dólares habiéndose elevado el mismo en casi 90% sin que se hayan logrado solucionar plenamente los problemas de mala ejecución y de deterioro anticipado de las obras. La empresa OAS se retiró del proyecto y de Bolivia a finales del 2012, después de la resolución del contrato para la construcción de la carretera que atravesaría el TIPNIS. La ABC anunció la continuación de los trabajos y reparación por cuenta propia de los problemas en la carretera, ya en plena etapa de operación, sin informar respecto a la situación del proyecto y de las responsabilidades de OAS. El proyecto de mayor conflictividad en el que se vio involucrada la Constructora OAS en Bolivia es

4 OAS gana 800 millones de dólares por tres vías. 02.10.2011. http://www.laprensa.com.bo/diario/actualidad/bolivia/20111002/oas-gana-us-800-mm-por-tres-vias_8076_13669.html

5 El embajador de Brasil señalaba a la prensa, "El crédito del Proex es un crédito del Banco Do Brasil y sólo puede ser dado a una firma. Para que otra firma pueda obtener el crédito, el proceso debe recomenzar totalmente (con) un nuevo trámite desde cero".

Fotografía: Cortesía www.hacer.org/latam/bolivia/eju.tv

la carretera Villa Tunari - San Ignacio de Moxos. La participación de la diplomacia presidencial del ex presidente Lula Da Silva en esta obra fue muy activa, lo que respondería a intereses brasileños (Petrobras cuenta con importantes concesiones petroleras al interior del TIPNIS y Brasil es un importante impulsor de los proyectos de infraestructura del IIRSA⁶ bajo el discurso de “integración regional”).

El presidente Lula fue el principal impulsor del IIRSA y de la penetración de capitales brasileños en Sudamérica y Bolivia. “IIRSA refuerza la hegemonía de Brasil, por lo que la diplomacia brasileña tiene la tarea de inventar formas de legitimación de la expansión de los conglomerados ubicados en este país, haciendo que la gente crea que la integración continental respalda la posición del país como receptor de nuevas inversiones”⁷. En el gobierno de Lula se aprobó el crédito del BNDES para la construcción de la carretera que destruiría el TIPNIS, bajo condiciones que obligaban a la contratación de OAS con la figura de exportación de bienes y servicios exclusivamente brasileños.

El TIPNIS se encuentra dentro del Eje Interoceánico Central del IIRSA que vincula los puertos del Atlántico con el Pacífico atravesando Bolivia. Las mayores inversiones en la construcción de carreteras en Bolivia se realizan en este Eje. Con la carretera a través del TIPNIS, el estado de Rondonia de Brasil lograría vincularse con el Corredor Bioceánico. La carretera Villa Tunari - San Ignacio de Moxos da continuidad a la carretera San Ignacio de Moxos - Trinidad (en construcción) y al proyecto de carretera pavimentada (en estudio con financiamiento del BID), Trinidad - Puerto Ustárez (un pequeño poblado de no más de 300 habitantes en la provincia Mamoré en el departamento del Beni), en la frontera con Brasil sobre el río Itenez. En la otra orilla se encuentra el Fuerte Real Príncipe da Beira, ubicado a 25 kilómetros de la ciudad de Costa Márquez por la carretera BR 429, en el estado de Rondonia.

La actuación del expresidente Luiz Inacio Lula da Silva estuvo enmarcada en dos viajes a Bolivia. El primero mientras era presidente de Brasil, cuando llegó a la región cocalera del Chapare el 22 de agosto del 2008. En la población de Villa Tunari anunció junto al presidente de Bolivia, Evo Morales, la firma del acuerdo de financiamiento del BNDES para la construcción de la carretera.

El contrato con OAS por 415 millones de dólares firmado el 2009 y financiado en 332 millones de dólares con un crédito del BNDES fue el resultado de la primera Licitación Pública Internacional bajo la figura de “Llave en Mano con oferta de financiamiento del proponente”. En esta convocatoria se vulneraron las normas de Inversión Pública al permitir que la empresa resulte responsable de la realización de estudios de factibilidad, diseño final, impacto ambiental, consultas públicas y construcción. Esta forma además restringe la convocatoria a empresas, pues estaría dirigida a la que cuentan con el compromiso de apoyo financiero de gobiernos y bancos.

A finales de agosto del 2011, cuando se realizaba la masiva movilización indígena en oposición al proyecto, que rechazaba el financiamiento y construcción de la carretera, Lula llegó a la ciudad de Santa Cruz como exmandatario, gracias al viaje pagado por OAS⁸. Se reunió con el presidente Evo Morales y según medios de prensa, uno de los temas fue la construcción de la carretera⁹. Lula disertó en el foro económico organizado por la Cámara de Industria y Comercio de Santa Cruz

El contrato con OAS por 415 millones de dólares firmado el 2009 y financiado en 332 millones de dólares con un crédito del BNDES fue el resultado de la primera Licitación Pública Internacional bajo la figura de “Llave en Mano con oferta de financiamiento del proponente”.

6 Molina Silvia, Lora Miguel. Costos sociales y ambientales de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos. 07.05.2010. <http://www.bolpress.com/art.php?Cod=2010050704>

7 Novoa, Luis Fernando. BNDES y el desborde imperialista de Brasil. 2010

8 Telegrama de la Embajada de Brasil en Bolivia de fecha 25 de agosto de 2011, dirigido al Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, solicitando pasajes para Lula da Silva para que asista a una reunión organizada patrocinada por OAS en Santa Cruz-Bolivia. http://transparencia.folha.com.br/segredos-do-Itamaraty?page=1&q=Bolivia&init_date=2011&end_date=2011&submit=Buscar

9 Ver <http://eju.tv/2011/08/lula-guarda-silencio-sobre-el-tipnis-con-evo-hablo-de-proyectos-de-integracin/>

Los avances hasta ahora de las investigaciones del “Lava Jato” muestran la forma de accionar de estos grupos empresariales, dentro y fuera de Brasil, en alianza con gobiernos y bancos financiadores que les ha llevado a alcanzar beneficios.

(Cainco) y estuvo en eventos con movimientos sociales y en un encuentro de jóvenes cruceños donde destacó la importancia de la “integración”. Su presencia en Bolivia se dio cuando se realizaba la VIII Marcha Indígena que desde la ciudad de Trinidad se dirigía a La Paz y sólo días antes de la violenta represión a la movilización indígena en defensa del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécore (TIPNIS) en Chaparina (Beni).

Después del largo periodo de conflictividad en el país e interpelación a los gobiernos de Bolivia y Brasil por violación de derechos humanos, derechos indígenas y colectivos, la decisión del gobierno boliviano de resolver el contrato, culminó en noviembre del 2012 con la firma del certificado final de conciliación de pagos entre ABC y OAS, quedando la interrogante del destino del cemento asfáltico contratado para el proyecto¹⁰. Sin embargo, los conflictos y las presiones

a los pueblos indígenas del TIPNIS por el proyecto rechazado desde su planificación por los pueblos indígenas con masivo apoyo de la población, no terminaron. Más aun, en abril del 2015, el presidente Evo Morales advertía “Acepten o no acepten, tarde o temprano habrá camino pavimentando por el Trópico de Cochabamba al departamento del Beni, que va a pasar por San Ignacio de Moxos”¹¹. Actualmente el Grupo OAS enfrenta dificultades financieras, ha llegado a tener ejecutivos y directores presos, anunció la venta de activos que afectarían a nueve de sus empresas, entre las que se encuentra INVEPAR, que gestiona la carretera peruana Vía Parque Rímac, su primera concesión fuera de Brasil.

Los avances hasta ahora de las investigaciones del “Lava Jato” muestran la forma de accionar de estos grupos empresariales, dentro y fuera de Brasil, en alianza con gobiernos y bancos financiadores que les ha llevado a alcanzar beneficios económicos y poder político. Los resultados profundizan el cuestionamiento a los intereses que promueven las mega-inversiones en proyectos de infraestructura en América Latina que en muchos casos va generando despojo y mayor desigualdad social.

10 Resolución ABC/RCDCA/006/2011 del 7 de diciembre de 2011.

11 Ver <http://eju.tv/2015/04/evo-a-los-indgenas-accepten-o-no-habr-carretera-por-el-tipnis/#sthash.M8Y8ptqM.dpuf>

La inversión brasileña en el Perú:

LA NECESIDAD DE REFORZAR EL CONTROL EN UN CONTEXTO CRÍTICO PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS

FRANCISCO RIVASPLATA CABRERA / DERECHO, AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

La Iniciativa para la Integración Sudamericana (IIRSA) se creó en el 2000 con el objetivo de avanzar en la modernización de la infraestructura regional y en la adopción de acciones específicas para promover su integración y desarrollo económico y social, traducándose en un Plan de Acción de diez años (2000-2010).

Los antecedentes más próximos del IIRSA son los denominados “Ejes Nacionales de Integración y Desarrollo” de Brasil, elaborados con el objetivo de construir un sistema integrado de logística destinado a volver la economía del país y la región más competitiva a nivel mundial. Algunos de los proyectos y acciones ideados en estos ejes fueron incluidos en su Plan Plurianual de Inversiones 2000-2003, denominado “Avanza Brasil”.

Así, se identifican tres intereses principales de Brasil en esta iniciativa: *a)* Numerosas salidas para sacar su producción industrial; *b)* Importante participación de empresas brasileñas en la construcción de varios proyectos de la IIRSA y, *c)* El BNDES se ha convertido en uno de los grandes financistas de la IIRSA.

Analizando los proyectos IIRSA, es posible verificar una concentración de obras de conexión con Brasil. Este país tiene participación en ocho (exceptuando el eje andino y el eje del sur) de los 10 ejes de integración regional de los que se compone IIRSA con una inversión estimada de 145, 758 millones de dólares de un total de 157, 730 millones de dólares.

Asimismo, en los proyectos previstos en el IIRSA para la implementación en el Brasil, 41 (es decir, el 86%) son los mismos existentes en la cartera de proyectos PAC. De este modo, si el gobierno brasileño se empeña en realizar los proyectos del programa nacional, contribuye también para el avance de las metas del programa transnacional¹.

Según un reporte de América Economía del 2013, de las 50 mayores empresas de Latinoamérica, 29 pertenecen al Brasil, 15 de estas ya se encuentran presentes en el Perú y, al 2020, los capitales brasileños podrían sumar 20.000 millones de dólares en nuestro país². Por otro lado, según esta misma fuente, el país más representado en el sondeo que muestra los resultados de las 100 principales multilatinas de la región es Brasil con 34 empresas, que equivalen al 50% de las ventas

1 Dalmo Gomes de Oliveira, Charles Alves Goncalves y Eraldo da Silva Ramos Filho “Problematizando a Integração Regional: As conexões entre a Iniciativa para a Integração da Infraestrutura Regional Sul-Americana (IIRSA) e o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) – Brasil” Revista IDEAS, Interfaces em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade. Disponible en: <http://r1.ufrj.br/cpda/ideias/revistas/v07/nesp/9.Eraldofilho.pdf>

2 Disponible en <http://www.larepublica.pe/05-06-2013/apuesta-de-brasil-en-el-peru-alcanzaria-los-us-20000-millones-al-2020>



de las 100 multilatinas estudiadas, lo que totaliza 994.916 millones de dólares.

Estas acciones empresariales se envuelven en un marco institucional de cooperación mutua entre los países y Brasil. Sólo en el caso del Perú, se firmó la Alianza Estratégica entre Perú y Brasil; el Memorándum de Entendimiento sobre Integración Física y Económica entre el Perú y Brasil que crea el Fondo Fiduciario de Desarrollo de Infraestructura de Transporte Vial; el Acuerdo de Complementación Económica (ACE 58); el Memorándum de entendimiento para la promoción del comercio e inversiones y el Convenio para evitar la doble tributación y para prevenir la evasión fiscal; entre otros. Hay que considerar que, actualmente, se está negociando la firma de un convenio trilateral entre Perú, China y Brasil, para la construcción de un ferrocarril que conectaría el oceánico Atlántico, con el Pacífico.

Estos acuerdos terminan siendo compromisos formales para promover las inversiones brasileñas, promocionando su cartera de proyectos de inversión e implementando las facilidades necesarias para captar capitales brasileños. De esta manera, se crea

la necesidad y se plantean facilidades para que distintas empresas brasileñas (como constructoras) ingresen con más fuerza al mercado regional.

Dos ejemplos concretos de la participación de empresas brasileñas en grandes proyectos de integración en infraestructura incluidos en IIRSA son, justamente la Carretera Interoceánica Sur (IIRSA Sur) y la Carretera Interoceánica Norte (IIRSA Norte), ambas carreteras que conectan Brasil con el oceánico pacífico a travessando el Perú.

Los tramos dos y tres de la IIRSA Sur, fueron ejecutados por la Empresa Concesionaria Interoceánica Sur S.A. - CONIRSA, de la que Odebrecht formaba parte. Por otra parte, el tramo 4 fue concesionado a la Empresa Intersur Concesiones S.A. por el mismo tiempo y condiciones. Tuvo varias críticas como las relacionadas a la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental por tramos y no de manera integral; la ejecución de la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) de manera posterior a la firma de contrato de concesión entre el Estado y el Concesionario; el reducido monto incluido en el Programa para la Gestión Ambiental y Social I (PGAS I) y la demora en el desarrollo del PGAS II y; la falta de planificación del proyecto.

El IIRSA Norte no dejó de estar envuelto en una serie de críticas relacionadas a las facilidades con las que contarían las empresas brasileñas y peruanas que formaban parte del consorcio³. Por ejemplo, los demás postores que se presentaron al concurso para la concesión del proyecto no tuvieron tiempo de adecuar sus ofertas a las cifras de Proinversión ya que estas fueron dadas sólo dos días antes de la fecha fijada para el otorgamiento de la buena pro. Se retiraron y, al no presentar sus ofertas económicas, proinversión amplió el plazo y la concesionaria compuesta por Odebrecht se presentó sola y con el monto inicial, ganando la buena pro.

A las críticas de estos dos proyectos se suma, recientemente, el escándalo en la adjudicación

3 IDL - Reportes, Criterios de competencia en el caso Odebrecht. Disponible en: <https://idl-reporteros.pe/criterio-de-competencia%E2%80%A6-en-el-caso-de-odebrecht/>

de la buena pro para la construcción del Gasoducto Sur Peruano. Como se recuerda, el contrato fue adjudicado a la asociación empresarial conformada por las compañías Odebrecht y Enagás. Sin embargo, la Asociación empresarial conformada por Sempra, Techint, TGI y GDF Suez indicó que Proinversión (Perú) los descalificó antes del plazo que tenían para subsanar una observación, señalando un problema de conflicto de intereses.

Así son muchas las críticas al comportamiento de las empresas brasileñas en el Perú⁴. Otro ejemplo es el incremento de los costos de las obras y de los contratos que tienen que ser asumidos por el Estado peruano. En total, han sido más de 750 millones de dólares⁵ de sobre costos. Esto sin contar con que muchos de estos proyectos no pasan por el control del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).

Después de ver la composición, de los consorcios podemos verificar que los grupos económicos peruanos como Graña y Montero⁶, también se han beneficiado de la internacionalización de Odebrecht ya que pueden trabajar con ellos como socios menores en proyectos multimillonarios⁷. De esta manera, el IIRSA ha ayudado a las constructoras brasileñas a consolidar su poder corporativo y tejer nuevas redes interempresariales desde una lógica nacional (con la implementación del PAC) e internacional. En otras palabras, el IIRSA ha generado más oportunidades para los grupos de poder económicos como Odebrecht en países vecinos como Perú⁸.

Es interesante como, en el contexto actual de corrupción en Petrobras y con las distintas discusiones sobre la apertura del secreto bancario en el BNDES deben cobrar mayor importancia y visibilizarse las distintas críticas relacionadas a la actuación de las empresas brasileras en proyectos ejecutados y en proceso de ejecución en el Perú.

El IIRSA Norte no dejó de estar envuelto en una serie de críticas relacionadas a las facilidades con las que contarían las empresas brasileñas y peruanas que formaban parte del consorcio

4 Idem.

5 Sobre este tema, IDL Reporteros realizó una interesante investigación denominada “Las cuentas con levadura de Odebrecht”. Disponible en <https://idl-reporteros.pe/las-cuentas-con-levadura-de-odebrecht/>

6 El grupo Graña y Montero ha logrado posicionarse en el mercado peruano con un conglomerado de empresas que ofrecen distintos servicios vinculados a la construcción e inmobiliario. Es una de las pocas empresas peruanas que lista en la Bolsa de Valores de New York.

7 Durand, Francisco, Francisco, “El Eje Lima-Brasilia (donde algunos entran en arcos y salen con flechas)”, Nueva Sociedad. Nº219, enero-febrero de 2009, p.115.

8 Durand, Francisco y Campodónico, Humberto, Poder Empresarial y sociedad civil en Sudamérica: entre el diálogo y el enfrentamiento, Lima: Desco, 2010, p. 67.

Colombia: Las inversiones ‘non sanctas’ de grupos empresariales brasileños

VANESSA TORRES / ASOCIACIÓN AMBIENTE Y SOCIEDAD (AAS) COLOMBIA

“La historia de América Latina es la historia del despojo de los recursos naturales”

Eduardo Galeano

La expansión de la economía brasileña en los últimos años ha tenido un crecimiento significativo, el cual se ve reflejado en la presencia sólida de sus empresas en Sudamérica, esta presencia dependiendo el caso concreto de cada país puede variar de acuerdo al proceso de acercamiento al mercado nacional.

Brasil es el segundo socio comercial a nivel de importancia en Latinoamérica para Colombia, teniendo para el año 2012 una participación del 42,5% del mercado, lo que constituye aproximadamente 807 millones de dólares, esto es un hecho importante en materia económica para nuestro país dado el estatus de economía emergente que ostenta Brasil a nivel internacional.

En el caso colombiano la participación por parte de estas empresas se ha dado de una forma pausada pero estable; en la actualidad podemos afirmar que empresas como Camargo y Correa, Odebrecht o Petrobras participan de forma activa y recurrente en los diferentes procesos de adjudicación de proyectos, la mayoría de alto impacto a nivel nacional. Tal es el caso de la empresa Votorantim que a su vez controla la empresa colombiana Minas Paz del Río tras la ampliación de por lo menos 26 años del contrato de explotación y comercialización de carbón otorgado por el gobierno colombiano en octubre de 2013.

Camargo y Correa se constituye en un grupo empresarial especializado en el desarrollo de la infraestructura, lo cual convierte en un desafío el monitoreo social. La presencia de Camargo Correa en Colombia se inició con el proyecto de construcción de la Hidroeléctrica Porce III, y se fortaleció posteriormente con la adjudicación de las obras iniciales del proyecto de construcción de la Hidroeléctrica de Ituango, considerado el proyecto más grande y ambicioso de este tipo en Colombia. Estas dos obras, se encuentran localizadas en el departamento de Antioquia.

La construcción de la Hidroeléctrica de Ituango ha sido una experiencia determinante para que el Consorcio CCC Ituango, del cual hace parte Camargo Correa, que recibió la adjudicación del proyecto Central Hidroeléctrica de Ituango junto con las firmas colombianas Concreto S.A. y Coninsa-Ramon H. S.A, como se resolvió en la audiencia pública el 28 de agosto de 2012, por parte de EPM. El proyecto tiene un costo estimado de 5.508 millones de dólares y busca aumentar la capacidad instalada de generación de energía del país en 2.400 gigavatios, lo que representa el 16% de la capacidad de la generación de energía actual en el país.

Este proyecto está ubicado en el noroccidente del departamento de Antioquia a unos 170 kilómetros de Medellín, es reconocido en Colombia como el más grande e importante proyecto de infraestructura, debido a la capacidad de abastecimiento de energía que generará y porque se le percibe como un reto para la ingeniería, por las características del territorio montañoso.

En materia de participación de las comunidades afectadas, ésta no se ha materializado de forma adecuada, porque los estudios de impacto ambiental presentados no contenían toda la información requerida, además no contienen información detallada sobre el territorio, concretamente no identificaba la relación de las comunidades con el territorio habitado, lo cual impedía evidenciar la afectación socio-económica y cultural causada a las comunidades con la desviación del Río Cauca.

Esto inevitablemente tuvo como consecuencia el desplazamiento de varias poblaciones, desconociendo sus derechos culturales, económicos y sociales heredados sobre las aguas y las tierras del Río Cauca, el territorio y una forma de vida ancestral como lo es el barequeo o la minería artesanal; desconociendo los protocolos internacionales para realizar este tipo de procedimientos y sin ninguna reparación por los daños. El 27 de octubre de 2014, es a partir de este contexto que el Movimiento Ríos Vivos Colombia y otras organizaciones presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una denuncia por violaciones de Derechos Humanos.

De igual forma se extingue la pesca por alterar el cauce del Río Cauca, lo cual transforma completamente la vida de los pobladores. Esta situación ha generado constantes protestas por parte de las comunidades dado que las conversaciones en las diferentes mesas de diálogo no han tenido resultados que hagan frente a la difícil situación.

En Colombia, la libertad de empresa no es absoluta ya que el legislador está facultado para limitar o restringir su alcance cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación, el Estado al regular la actividad económica cuenta con facultades para establecer límites o restricciones en aras de proteger el medio ambiente esto de acuerdo con la Corte Constitucional, de tal forma que si la empresa cumple con el marco normativo base, pero no se establecen exigencias que garanticen el cumplimiento del mismo la empresa no está incumpliendo, razón por la cual es de vital importancia el accionar efectivo de las instituciones encargadas de supervisar este tipo de proyectos, tales como el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible o la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA.

Las licencias ambientales se convierten en el requisito obligatorio para que toda persona jurídica o natural pueda ejecutar un proyecto determinado que cause daños al ambiente o a los recursos naturales, en relación con la misión del Estado colombiano de planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración y sustitución. Además [El Estado] debe prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados.

Sin embargo, para atraer inversiones de empresas extranjeras, y nacionales se ha optado por debilitar el contenido inicial de las licencias ambientales en los proyectos, como ocurrió en el caso de la construcción de la Hidroeléctrica de Ituango.

La licencia ambiental aprobada (puede consultarse en la Resolución 0155 de 2009) fue controvertida desde la realización de la audiencia pública porque las comunidades afirmaban que no se generó el espacio de discusión necesario para dar a conocer a las organizaciones sociales y a la comunidad los impactos que el proyecto iba a generar, al igual que las medidas de manejo propuestas para prevenir, mitigar, corregir y compensar dichos impactos, es decir no se generó un espacio de discusión efectivo.

Además de un escenario difícil dada la poca participación dada a las comunidades habitantes en el territorio afectado, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), el Ministerio de Medio Ambiente y Corantioquia, la Corporación Autónoma Regional encargada de hacerle seguimiento al proyecto, realizaron una visita de campo a los sitios en los que se iniciaban las obras de construcción

Para atraer inversiones de empresas extranjeras, y nacionales se ha optado por debilitar el contenido inicial de las licencias ambientales en los proyectos, como ocurrió en el caso de la construcción de la Hidroeléctrica de Ituango.

de la Hidroeléctrica, la cual se hizo sin previo aviso a las comunidades de la zona, lo que impidió que se pudieran debatir temas trascendentales como las medidas de acción frente a la contaminación de las aguas debido al empleo de motobombas, los daños a los caminos veredales, o los daños a los cultivos y a las viviendas.

Los procesos como las consultas públicas hacen parte de Plan de Manejo Ambiental y son requisitos legales para el otorgamiento de licencias ambientales en Colombia, son espacios limitados, y en muchas ocasiones no tienen el manejo adecuado por parte de la autoridad ambiental para garantizar la participación y reconocimiento del proyecto por parte de la comunidad, realidad que puede entenderse no solo en los proyectos en los que participa Camargo Correa, sino prácticamente en todos los proyectos de infraestructura en Colombia, en los que los espacios de participación, han sido empleados en varios para dar a conocer apenas informativamente, las generalidades de los proyectos.

El aumento de la participación de actores internacionales en la dinámica de mercado a nivel nacional exige el fortalecimiento y mejora del marco normativo existente en materia ambiental, pero en el caso colombiano el marco normativo ha sido debilitado, como puede ejemplificarse con la reducción de términos en torno al trámite de las licencias ambientales; el pasado martes 5 de mayo se dio a conocer el informe de conciliación al proyecto de Ley 138 de 2015 del Senado y al proyecto de ley 200 del 2015 de la Cámara de Representantes, los cuales constituyen el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018.

En el artículo 179 de la norma se plantea la reducción del tiempo estipulado para la el otorgamiento de licencias ambientales el cual se reduce a 90 días en los cuales se incluye las visitas por parte de la autoridad ambiental competente al proyecto para corroborar el contenido del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) si las considera necesarias, las solicitudes por parte de la misma de conceptos por parte de expertos y de las instituciones al igual que la solicitud de información adicional al interesado que está solicitando la licencia. Esto reduce el término de decisión de la autoridad ambiental para el otorgamiento de la licencia a 30 días, tiempo que no es suficiente teniendo en cuenta el análisis técnico y científico requerido para una decisión responsable.

Si bien grupos empresariales como Camargo Correa tienen una política social y ambiental definida, materializada en instituciones creadas para fines específicos, su estrategia en el discurso no es compatible con los procedimientos que se realizan durante el desarrollo de los proyectos en los que participan, dado que los espacios de participación generados son limitados, lo cual no garantiza el reconocimiento del proyecto por parte de las comunidades, adicionalmente es importante mencionar la limitada información brindada por parte de la empresa frente a los proyectos que maneja en el país, los cuales como es el caso de Hidroituango son proyecto de alto impacto en materia ambiental y social y por lo tanto la participación de la sociedad civil al igual que el conocimiento de la información en torno al proyecto constituyen un derecho fundamental respaldado por la Constitución Política de 1991 y la reciente Ley 1712 de 2014 sobre acceso a la información, el acceso a la información en torno al desarrollo de este tipo de proyectos .

Es claro que la participación de grupos empresariales como Camargo y Correa en Colombia y en todos los países de la región va a mantenerse y a fortalecerse, razón por la cual es fundamental que establezcan una política de transparencia frente a los proyectos en los que ejecutan; esta política debe ser respaldada por las instituciones financieras internacionales como es el caso del BNDES, dado que si una institución que se constituye como principal financiador de los grupos empresariales brasileños no cuenta con una política de transparencia, participación y acceso a la información implementada a nivel internacional dificulta que estos actores se sumen a este objetivo.

Instituciones miembro de la Coalición regional

